

vista, por el Lic. D. Eleuterio Avila á nombre del Lic. Mejía, y teniendo presente todo lo demás que convino. Considerando: que el auto de 4 de Noviembre del año próximo pasado que mandó, se adviertan al Juez de Distrito de Hidalgo las faltas en que incurrió en sus procedimientos contra los Licenciados Pavon y Hernandez, para que cuide en lo sucesivo de no incurrir en ellas, mandando que esa advertencia se asiente en el libro de acuerdos para los efectos del artículo 14 del decreto de la Corte de 24 de Marzo de 1813, se refiera á faltas que no pueda decirse proceden de animadversion, odio personal, infraccion de la ley expresa ú otras que deban ser reprimidas con severidad; que con el hecho de haberse hecho saber ese auto al Lic. Mejía y formándose las diligencias relativas á él, basta para que dicho Juez se conduzca debidamente en lo sucesivo y que sus procedimientos respecto de los Licenciados Pavon y Hernandez, se pueden considerar ajenos de dolo malo, se decreta: que se revoca el mencionado auto de 4 de Noviembre del año anterior.

Devuélvanse á la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito en calidad de Circuito los cuadernos que remitió á esta 1ª Sala, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*M. Zavala.*—*Ignacio Ramirez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Junio 9 de 1873.—*Alejo Gomez Eguiarte.*

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan contra D. Angel Cortés y socios, por falsa amonedacion.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL  
DEL JUZGADO DE DISTRITO.

Ciudadano Juez de Distrito.

De todas las constancias de esta causa aparece, que D. Angel Cortés procedió á la acuñacion de moneda de cobre en Tlazasalca sin tener para ello la competente autorizacion.

D. Angel Cortés no niega haber procedido á la acuñacion; se disculpa unicamente manifestando, que ignoraba que hubiese disposiciones que reservasen tal facultad al gobierno general, y que no hizo más sino que hacer efectivo un acuerdo del Ayuntamiento de Tlazasalca que ordenó tal acuñacion, para el tanto del comercio de aquel lugar. Exponiendo, por último, que ya otros Ayuntamientos anteriores habian hecho lo mismo con el propio objeto.

Mas tales disculpas no pueden en manera alguna destruir el cargo; porque conforme á los antiguos principios de Derecho, y segun la prescripcion del Código vigente en su artículo 21, *«la ignorancia de las leyes no sirve de excusa y á nadie aprovecha.»*

En cuanto á lo que alega Cortés respecto á que él unicamente se contrajo á hacer efectivo un acuerdo del Ayuntamiento de Tlazasalca respecto á la referida acuñacion, este Ministerio encuentra, que aun cuando está probado que efectivamente existió tal acuerdo; pero tambien observa que se ha pretendido exhibir como defensa un hecho en que tambien está fundada la criminalidad.

En efecto, si el Ayuntamiento de Tlazasalca dispuso tal amonedacion sin tener facultades para ello, todos sus miembros se hicieron responsables de tal hecho, y como

D. Angel Cortés fué uno de ellos y el principal, pues era quien fungía entonces de Presidente, es evidente que él tambien es reo con ese carácter.

Para el caso de haber procedido á la amonediación sin tener facultades, lo mismo da que haya sido una corporación que un individuo.

Y antes bien constituye una circunstancia agravante que haya sido un Ayuntamiento el que infringió la ley; porque segun el sentir de los juriscultos, los cuerpos municipales representan un poder público, y los poderes públicos estan en la obligación no solo de guardar, sino tambien de hacer guardar la Constitución y las leyes vigentes.

Es claro, segun esto, que mas responsabilidad tiene el que debe hacer guardar las leyes, que el que unicamente debe guardarlas.

Aquí vuelve otra vez á traerse por disculpa la ignorancia de las disposiciones gubernativas; pero aquí tambien vuelve á repetirse, que la ignorancia de ellas á nadie favorece ni disculpa.

Reo es, pues, D. Angel Cortés, tanto por haber sido uno de los municipales que acordaron tal acuñación; mas reo es, por haber sido el Presidente de tal corporación, y mucho mas, en fin, lo es, por haber hecho efectivo tal acuerdo, cuando debió no acatarlo por ser indebido.

Segun esto, es acreedor á las penas que las leyes señalan contra los falsos monederos, pues esta denominación tienen los que proceden á la acuñación de moneda sin tener facultades para ello.

Las pruebas rendidas por el reo son enteramente inatendibles, segun los puntos á que se refieren; y ademas, nada podrian favorecer á aquel cuando ha confesado los hechos, y sus disculpas no destruyen, como hemos visto, el cargo en manera alguna.

En cuanto á Marcelo Jimenez, que confesó el cargo (fojas 66 vuelta) y que de la

causa aparece que verificó la acuñación de la moneda de cobre á que se contrae este proceso, es de reputarse verdaderamente reo; y por lo mismo es acreedor á la pena correspondiente.

El se disculpa con que entendia que D. Angel Cortés, como Presidente del Ayuntamiento, tenia facultades para mandar hacer tal acuñación; ó en otros términos, que ignoraba que hubiese ley que prohibiera aun á los Cuerpos municipales, verificar la amonediación referida.

Volvemos otra vez á que la ignorancia de las leyes á nadie disculpa ni favorece, y en consecuencia se viene á deducir, que Marcelo Jimenez no ha destruido el cargo con la causa que expone, pues debió saber que solo á la Federación y no á los municipios, ni á sus miembros, está cometida la facultad de verificar la acuñación de moneda.

D. Doroteo Espinosa y D. Mariano Cano son tambien responsables como miembros del Ayuntamiento que acordó la amonediación expresada.

Ellos niegan el cargo y se esfuerzan en hacer creer que no asistieron al acuerdo en que se determinó la acuñación; pero está en el proceso probado lo contrario, puesto que la acta de fojas 24 está suscrita por dichos individuos.

A esto contestan los reos, que es cierto que firmaron la acta; pero que lo hicieron candorosamente, pues no sabian lo que hacian, y esta respuesta dada por hombres mayores de edad, enteramente cuerdos y que obraron con entera libertad, no solo no satisface, sino que puede ser hasta una circunstancia agravante en el delito principal.

En efecto, decir unas personas de la categoría, de la edad y del conocimiento de Espinosa y Cano que no supieron lo que firmaron; que suscribieron la acta unicamente porque se les dijo, "firma aquí", sin ver precisamente lo que autorizaban como municipales; obrar tan candorosamente así, no es ni será creíble jamas, y tanto menos lo es,

cuanto que segun aparece en la causa, firmaron tal acta despues de imponerse de su contenido.

En vista de tales reflexiones y de tales hechos, ¿no se ve desde luego que se pretende engañar á la Justicia, y engañarla descaradamente, cuando están á la vista hechos concluyentes, pruebas irrefragables?

Y este engaño que se pretende hacer á la justicia ¿no será una circunstancia agravante?

Al menos D. Angel Cortés y Marcelo Jimenez dan por disculpa una cosa, que si no es admisible, si es posible.

Podria creerse mas bien que una persona no esté al corriente de tal ó cual disposicion; podria creerse tambien que alguien de buena fe entienda, que los Ayuntamientos, tratando de alentar el comercio de sus municipios, estan facultados para acuñar moneda de cobre y de pequeña representacion; pero jamas podrá creerse, que una persona cualquiera ni menos que un funcionario público, ponga su firma sin saber donde ni porqué; obrando con una ligereza tan inaudita, que estampa su nombre donde cualquiera le dice: «ponlo aquí.»

No siendo en manera alguna atendibles las razones expuestas por Espinosa y Cano, debe entenderse, que si sus firmas aparecen en la acta relacionada, es porque efectivamente asistieron al acuerdo donde se determinó la acuñacion de la moneda de cobre, y que por lo mismo son reos de infraccion de las leyes federales de la materia, y acreedores por lo mismo á las penas que ellas señalan.

No sucede lo mismo respecto de D. Luis Bustamante y D. Miguel Cruz Peña; porque niegan el cargo, fundándose en las mismas constancias procesales. La firma no aparece en la acta donde consta el acuerdo del Ayuntamiento, ni hay quienes declaren de vista que efectivamente vieron en dicha sesion á las referidas personas.

Sobre este particular no existe mas testimonio que el de D. Angel Cortés; pero el

dicho de este no es atendible por el carácter que tiene en la causa.

Es cierto que se presume que han de haber asistido dichas personas al acuerdo; porque siendo individuos de tal corporacion en ese año, debieron haber concurrido á la sesion; y por lo mismo se presume, que han de haber sido tambien los autores de semejante acuerdo.

Pero tal presuncion no es una prueba perfecta, en la cual pueda fundarse un auto condenatorio.

No estando, pues, plenamente probado que Bustamante y Peña hayan decretado tal amonodacion, el cargo no puede subsistir, ni hay por lo tanto en que fundar una sentencia en su contra, por lo cual deben de ser absueltos.

En conclusion, este Ministerio pide, fundado en las constancias procesales, se imponga á los reos Angel Cortés, Marcelo Jimenez, Doroteo Espinosa y Mariano Cano, la pena que los designa la ley general fecha 12 de Noviembre de 1841, y se absuelva á D. Luis Bustamante y D. Miguel Cruz Peña, por falta de prueba respecto al delito por el que fueron procesados.

Morelia, Febrero 16 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*

Es copia que certifico. Morelia Mayo 17 de 1872. *Isidro Aleman.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Morelia, Mayo 14 de 1872.—Vista esta causa instruida en los Juzgados de Letras de Zamora contra Angel Cortés, Luis Bustamante, Miguel Chavez Peña, Mariano Cano, Doroteo Espinosa, Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Rafael Maldonado por el delito de falsa amonodacion; las diligencias del sumario; la confesion con cargos hecha á los acusados y sus respuestas; lo alegado por sus defensores y pedido por el Ministerio público; la citacion para sentencia y cuanto mas convino y Consideran-

do: que el hecho criminoso imputado á los cinco primeros, consiste en haber acordado como miembros del ayuntamiento de Tlazasalca, mandar acuñar una cantidad pequeña de tlacos, para el tanteo del comercio en pequeño, porque escaseaban en la poblacion con perjuicio de la clase menesterosa, y este hecho está probado respecto de Cortés, Espinosa y Cano, tanto con su propia confesion como con el documento de fojas 24 que reconocieron en debida forma; que respecto de Bustamante y Chavez Peña, no existe la misma prueba, porque ademas de negar el hecho imputado y no haber contra su negativa otro indicio de Cortés, que no hace fé por singular y por ser cómplice, tampoco aparecen en el citado documento de fojas 24, las firmas de estos dos acusados: que en cuanto á Jimenez, Torres y Maldonado, el hecho anterior no constituye el cargo que se les hizo, sino el de haber acuñado como herreros y con el cuño del Ayuntamiento, una pequeña suma de tlacos, por orden de Cortés, quien con el carácter de primera autoridad municipal les mandó aquel trabajo: que respecto de estos tres no se puede afirmar jurídicamente que cometieron un delito, porque en primer lugar, estaban hasta cierto punto obligados á obedecer la orden de la autoridad, para un hecho lícito en su concepto, puesto que de tiempo inmemorial es costumbre en los pueblos que los Ayuntamientos acuñen tlacos, como es público y notorio, y en segundo, hay no contra dichos acusados prueba derecha, porque existe su confesion cualificada sin mas adminículo que el dicho de Cortés y el recíproco de ellos, que como cómplices no produce efecto: que respecto de Cortés, Espinosa y Cano hay las circunstancias atenuantes siguientes: 1.<sup>a</sup> la costumbre inmemorial de que antes se ha hablado: 2.<sup>a</sup> la necesidad de proveer á un mal de la poblacion que se perjudicaba en el comercio pequeño por la escasez de tlacos: 3.<sup>a</sup> la insignificante suma que de esta moneda se fabricó; 4.<sup>a</sup> haber suspendido su emision lue-

go que se llegó á entender que no era lícita; 5.<sup>a</sup> la publicidad y buena fé con que se procedió, creyendo que no se cometía una accion reprobada por la ley, y 6.<sup>a</sup> y última, la negligencia de parte de la autoridad competente para proveer á las poblaciones de moneda de cobre legítima y bastante á las necesidades de aquellas, cuyo mal se palpa no solo en Tlazasalca sino en casi toda la República. Teniendo presente en fin que el caso actual no está comprendido en ninguna de las leyes vigentes de la materia y con fundamento de las leyes 26 tit. 1.<sup>o</sup> y 8.<sup>o</sup> tit. 31 part. 7.<sup>a</sup>, se declara: 1.<sup>o</sup> se dan por conpurgados con el tiempo sufrido de prision y molestias de la causa, á Angel Cortés, Doroteo Espinosa y Mariano Cano por el delito de acuñacion de moneda de cobre. 2.<sup>o</sup> Se absuelven del cargo del mismo delito á Luis Bustamante, Miguel Chavez Peña, Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Rafael Maldonado; poniendose á todos en libertad bajo de fianza. Ilágaseles saber así como á sus defensores; remítase copia de este fallo al Semanario Judicial, y la causa, al Tribunal de Circuito para su revision.

Lo decretó en definitiva el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.  
—*Gabino Ortiz*.— Una rúbrica. Ante mí,  
—*Isidro Aleman*.— Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Mayo 19 de 1872.—*Isidro Aleman*, Escribano público.

#### *Pedimento del C. Fiscal del Tribunal de Circuito.*

C. Magistrado del Tribunal de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que la causa presente se ha seguido en el juzgado de Distrito de Michoacan por acuñacion de moneda de cobre, á Angel Cortés, Luis Bustamante, Miguel Chavez Peña, Mariano Cano, Doroteo Espinosa y Marcelo Jimenez. Dió lugar á su formacion el hecho de haber acordado el Ayuntamiento de Tlaza-

salca, mandar acuñar una pequeña cantidad de octavos de real, el día 8 de Agosto de 1868; (fs. 24) contraviniendo así al artículo 72 fracción 23 de la Constitución federal, y las leyes que han mandado se observe el sistema métrico decimal, en la acuñación de la moneda.

Respecto de Bustamante y Chavez Peña, no existe otro dato que los complique en el asunto, que el dicho de Cortés, inhabil conforme á las leyes 8 y 10 tit. 16 Part. 3ª, y que está además en contradicción con la acta del acuerdo referido, en que no aparecen las firmas de esos municipales. (fs. 21.)

El cuerpo del delito está plenamente justificado con la presentación de las monedas en cuestión y de los instrumentos de su acuñación, (fs. 108) y con las declaraciones de Marcelo Jimenez, Rafael Maldonado y Liberato Torres, individuos á quienes se les hizo cargo de haber fabricado como artesanos, las monedas por orden del Ayuntamiento; (fs. 66, 67 vta. 68 y 107.) así como con el atestado de los peritos Vicente Manriquez y Francisco Sanchez. (fs. 105 y 106)

Cortés, Espinosa y Cano, signatarios del acuerdo, han confesado que no tuvieron mas móvil en aprobarlo, que el de proveer á la población de octavos de real que escaseaban; fundándose en la costumbre inmemorial que habia para casos semejantes.

Respecto de esta costumbre hay que observar, que en otros procesos se ha visto que en efecto varios Ayuntamientos de Michoacan, la han puesto en práctica.

El hacer acuñar moneda falsa, era antiguamente una regalia ó facultad privativa del Soberano; y así es que fabricarla se tenía por delito de lesa magestad, y hoy se tiene como delito de lesa nación aunque de segundo orden. Alabrogarse esa facultad, se rompe el vínculo del comercio, y se altera la regla y medida de las mercaderías.

La ley 15 tit. 14 Part. 7ª, impone la pena del cuádruplo á los fabricantes de moneda aunque sea de buena calidad, y además la de obras públicas y destierro, según la

condición del reo. La real cédula de 26 de Noviembre de 1772, renueva las antiguas prohibiciones. Y aunque no están en uso tan enormes penas, ellas indican la gravedad del delito. No estando en el caso probadas las exculpaciones de los reos principales, no cabe duda que debe imponerseles pena. En cuanto á los artesanos, si bien obraron en cumplimiento de una orden del municipio, su ignorancia sin eximirlos de culpa, la atenua en gran manera.

Por estas consideraciones el Promotor fiscal pide: 1º; Se confirme la sentencia de 1ª instancia por lo que toca á Angel Cortés, Doroteo Espinosa y Mariano Cano, dándolos por conpurgados: 2º; Se den igualmente por conpurgados con las molestias salidas, á Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Rafael Maldonado. 3º; Se confirme el mismo fallo absolviendo á Luis Bustamante y Miguel Chavez Peña. 4º; Se inutilicen los instrumentos hallados y se de orden por el conducto respectivo, para recoger las monedas acuñadas por el Ayuntamiento y puestas en circulación en el municipio de Tlazasalca, inutilizando las que sean habidas.

Querétaro, Junio 19 de 1872.—*Luis Oastañeda.*

#### *Sentencia del Tribunal de Circuito.*

Querétaro, Julio 9 de 1872.—Vistos: la Autoridad política de Purépero ordenó al Alcalde de Tlazasalca en ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y nueve, inquirese el delito de peculado y fabricación de moneda falsa de que era acusado el Presidente del Ayuntamiento de aquella población, con cuyo motivo se procedió contra Angel Cortés, soltero, de treinta y un años, sastre, y por el segundo de los delitos expresados, contra Doroteo Espinosa de veintitres años, matansero, Luis Bustamante, comerciante, de treinta y seis años, Miguel Chavez Peña, comerciante, de veintinueve años, todos casados, y contra Mariano Ca-

no, viudo, de treinta y nueve años, sastre, cuyos individuos formaron el Ayuntamiento de Tlaxasalca, lo mismo que Marcelo Jimenez, herrero, mayor de edad, casado, á los que se les hizo cargo de la fabricacion de que se ha hecho mérito, procediéndose á la vez por complicidad en el delito enunciado, contra Liberato Torres, soltero, carpintero, de veintin años y contra Rafael Maldonado, casado, herrero, mayor de edad, todos vecinos de la poblacion de Tlaxasalca.

De todo lo actuado resulta: que el veintiocho de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, inició proposicion el reo Cortés en el Ayuntamiento, para fabricar y sellar una cantidad de tlacos, con motivo de la escasez de ellos que se tenia en el comercio, que se resistia á recibir otras monedas entre las que se hallaban falsas, por lo cual se convino en autorizar á los plateros y á las personas que tuviesen cobre, á efecto de que sellasen los tlacos á medias, poniendo aquellos la especie, todo lo cual aparece en la acta que se levantó al efecto en la fecha citada, cuyo documento es visible á fojas veinticuatro frente, firmada por Cortés, Espinosa, Cano y el secretario que lo fué Antonio Bravo, de cuya providencia resultó haberse acuñado por Jimenez, Torres y Maldonado, la cantidad de veinte pesos que correspondieron distintas fracciones á cada uno de aquellos, segun trabajo que emprendieran, y la restante, se atribuia á Maldonado que la tomase para sí sin la autorizacion respectiva, en lo que constituyó el peculado de que se le hizo cargo.

En el proceso aparece justificado, primero: la existencia del cuerpo del delito consistente en las monedas y troquel de que se dió fé, corroborado por la acta de 28 de Agosto citada, confesado por el mismo Cortés, Presidente que era del Ayuntamiento; pues aunque Espinosa y Cano negaron tener conocimiento del acuerdo relativo, aparecen puestas sus firmas y no justificada su excepcion de que fuesen obligados por el C. Manuel Orozco, quien negó á fojas 45 frente

TOMO IV.—PARTE II.

haber ordenado se pusiesen tales firmas, lo mismo que negó el C. Francisco Vargas á fojas 55 vuelta, de haber llevado recado por parte de Orozco para que aquellos pusiesen las firmas de que se ha hecho mérito, á lo que se agrega, que en la misma acta aparece que Luis Bustamante se adhirió al acuerdo, con cuyo acto hubo mayor número para que fuese su verificativo aquel, no obstante extrañarse la falta de firma del mencionado Bustamante; de manera, que la codelinquencia de esos individuos en la fabricacion de moneda falsa está plenamente probada, abrogándose atribuciones propias del Congreso general, segun lo prevenido en el artículo 72 fraccion 23 de la Constitucion general de 1857.

Segundo: que el cargo enunciado, no aparece así mismo contra Miguel Chavez Peña, ni contra Marcelo Jimenez, pues contra éstos, solo existe el dicho de Angel Cortés sobre que asistieron á la sesion que acordó la fabricacion de moneda, cuyo dicho no tiene fuerza, ni constituye prueba plena segun lo dispuesto por la ley 8ª y 10ª, título 16 Part. 3ª; de manera, que solo existe contra el último de los reos, es decir Jimenez, lo mismo que contra Torres y Maldonado la complicidad enunciada, puesto que ellos fabricaron la moneda utilizándose las partes que les correspondian, sin que obste la orden que dicen recibieran para la elaboracion, puesto que ella emanaba de persona falta de jurisdiccion, como porque para oponerse á aquella tenian los medios expresados por las leyes, sin que tampoco exista en favor de los reos, la ignorancia que alegan, puesto el principio "*ignorantia facti non juris excusat.*"

Tercero: que con respecto al delito de peculado de que se hizo cargo á Cortés, se justificó la inversion de la cantidad de tlacos que se acuñara, con lo depuesto por el C. Miguel Acevedo, tesorero municipal, segun lo certificó á fojas 42 frente, en cuyo caso, faltó la base en que se fundara el cargo ó no existió la prueba con respecto á



que el reo no invirtiese en usos propios el dinero acuñado, no obstante haber dicho se apropiara una parte por habérsela pagado por sueldo cuando funcionó como secretario, pues sobre el particular constituiría un indicio destruido por la liquidación ó valor de la entrada de los tlacos acuñados de que hace mérito el documento ya citado, á la que no se le puede dar mayor amplitud, ó que se elaborase una cantidad superior; puesto que en el proceso no constan mas que los antecedentes citados.

Por todo lo expuesto, de conformidad en parte con lo pedido por el C. promotor fiscal y con fundamento del artículo 8º de la ley de 1º de Noviembre de 1841 y consecuencia, ó en uso de la facultad que concede la ley 8ª, tít. 31, Part. 7ª y 26, tít. 1º de la misma, fallo: Primera; se dan por compurgados con el tiempo que han sufrido de prisión, á los reos Angel Cortés, Doroteo Espinosa, Mariano Cano y Luis Bustamante, de la responsabilidad que les resulta por haber ordenado como municipales la fabricación de moneda para la circulación en el comercio de Tlazasalca. Segunda; se absuelve á Miguel Chavez Peña y á Marcelo Jimenez de la cooperación en el delito de que se les hizo cargo y á que se refiere la proposición precedente. Tercera; se dá asimismo por compurgado al citado Marcelino Jiménez, Liberato Torres y Rafael Maldonado, con el tiempo que han sufrido de prisión y los padecimientos morales consiguientes, del delito de complicidad consistente en la fabricación de los tlacos de que se ha hecho mérito. Cuarta; se absuelve al C. Angel Cortés del delito de peculado de que se le hizo cargo.

Y quedando revocada en lo que no es conforme con la presente, la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Moralia á 14 de Mayo del presente año, notifíquese y sin ejecutar, librense por la secretaría los recados que corresponden; y consecuente con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley de 14 de Febrero de 1826, remítase es-

ta causa á la Corte Suprema de Justicia para su revisión; y al efecto, prevengase á los reos nombren defensor para la tercera instancia, de los abogados cuyos nombres tiene en lista el juez citado, que se las presentará haciéndoles notar la incompatibilidad en la defensa de Cortés con los demás reos, esperando que la Superioridad devuelva el proceso, si lo extima de justicia, á fin de remitirlo como se remitirá al Juzgado de su procedencia, para que lo prosiga contra Antonio Bravo con sujeción á las leyes; dígase al juez destruya el troquel, lo mismo que las monedas acuñadas sin autorización legal, y librese oficio al C. Ministro de Justicia, para que se sirva dar cuenta al C. Presidente de la República, á efecto que por su conducto recabe acuerdo, ó la medida que corresponda del Congreso de la Unión, que cubra la falta de moneda que se nota en Tlazasalca y en otros pueblos de Michoacan, la que es necesaria al comercio ó interesa de un modo secundario al erario de la Nación, por los derechos que aquel proporciona; dígase al juez cuide en lo sucesivo se pongan las filiaciones de los reos. El C. Magistrado de Circuito, así lo decretó y firmo.—Doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal*.—*Ramon Reynoso*.

Es copia que certifico. Querétaro, Febrero 7 de 1873.—*Ramon Reynoso*.

#### *Pedimento del C. Procurador General de la Nación.*

El Procurador General de la Nación dice: En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Tlazasalca, Estado de Michoacan, el día 28 de Agosto de 1868, se tomó la determinación de mandar sellar cierta cantidad de octavos de real, con el objeto de remediar los graves perjuicios que sufría el comercio de ese pueblo, por la gran cantidad de moneda falsa de cobre que circulaba en él, (fs. 124;) cuya determinación se llevó á efecto acuñándose una pequeña can-

tividad de dichas monedas con un cuño propiedad del Ayuntamiento, y que habia usado desde 1853, segun la fecha que tiene grabada en el anverso. (fs. 11, 13, 39 y 27.)—De esta cantidad habiendose aplicado una parte D. Angel Cortés, Presidente del Ayuntamiento, en pago de sueldos atrasados que segun decia habia devengado como secretario de la misma corporacion, (fs. 3;) se presentaron contra él varias quejas ante el Prefecto de Parépero, acusándolo de peculado y de haber mandado fabricar la referida moneda, (fs. 1ª,) por lo que el Prefecto puso en conocimiento del Juez de Letras del Partido los hechos denunciados, para que procediera á la correspondiente averiguacion, (fs. 1ª) el cual haciendo la debida distincion entre el delito de peculado del orden comun, y el de acuñacion de moneda de la esfera federal, mandó seguir la informacion de éste último por cuerda separada. (fs. 9)—En consecuencia se procedió contra Angel Cortés, Doroteo Espinosa, Mariano Cano, Luis Bustamante y Miguel Chavez Peña, como miembros del Ayuntamiento que ordenó la acuñacion de la moneda, y contra Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Rafael Maldonado, herreros que la fabricaron.

Siguiéndose la causa en el juzgado 2º de letras de Zamora hasta ponerla en estado de citacion para sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de Morelia en Mayo 14 de 1872, y por la que se dió por compurgados con la prision sufrida y molestias del proceso del delito de acuñacion de moneda de cobre, á los reos Angel Cortés, Doroteo Espinosa y Mariano Cano, absolviéndose del mismo cargo á Luis Bustamante y Miguel Chavez Peña, tanto por no constar su firma en el acta de la sesion en que se acordó la acuñacion, como por no haber otro indicio de su intervencion en ese asunto, que el dicho de Cortés, que no hacia prueba plena por ser singular y de un cómplice en el delito: y declarando tambien absueltos á Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Ra-

fael Maldonado que fabricaron la moneda. (fs. 118)—En segunda instancia se confirmó el fallo de primera, en cuanto dió por compurgados á Angel Cortés, Doroteo Espinosa y Mariano Cano, y absolvió á Miguel Chavez, revocándola en cuanto dió por absueltos á Luis Bustamante, Marcelo Jimenez, Liberato Torres y Rafael Maldonado, dándolos por compurgados en consideracion, respecto al primero, que si bien no constaba su firma en la acta de la sesion, si constaba en ella que habia asistido y aun se habia adherido á la proposicion de mandar acuñar la moneda de cobre; y en cuanto á los últimos, como cómplices del delito por haberla fabricado. Y absolviendo por último á Angel Cortés, del delito de peculado. (Sentencia de Julio 9 de 1872 fs. 16 del Toca.)

No habiendo interpuesto ningun recurso de esta sentencia los agravados por ella, (fs. 28 vta. y 29 del Toca,) ha causado ejecutoria en la parte que falló sobre el delito de acuñacion de moneda. No así en cuanto absolvió á Angel Cortés del delito de peculado, pues como consta á fojas 9, sobre esta acusacion se le ha seguido causa por cuerda separada, y lo comprueban plenamente las constancias de fs. 56 y vuelta; y en consecuencia, ni en estas actuaciones se ha hecho averiguacion sobre tal delito, ni se le hizo cargo de él al acusado, pues al tomarle confesion con cargos, solo por incidente se hizo referencia á él y no directamente; ni por último, se hizo mencion de él para nada en la sentencia de 1ª instancia; así es que no ha debido el Tribunal de Circuito ni absolver ni condenar al reo, por un delito que no es de la jurisdiccion federal sino de la ordinaria, y sobre el cual de ninguna manera existía la informacion correspondiente en las actuaciones que se le presentaban para ser revisadas.

Fundado en estas razones, el Procurador general es de opinion que debe revocarse la sentencia de segunda instancia, en la parte que absolvió á Angel Cortés del delito de peculado.



México, Febrero 20 de 1873.—*Altamirano.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 28 de 1873.—Vista la causa que comenzó á instruirse en el Juzgado de Letras de Zamora y se prosiguió en 1ª instancia ante el de Distrito de Michoacan, sustanciándose la 2ª instancia en el Tribunal de Circuito de Querétaro contra D. Angel Cortés, D. Luis Bustamante, D. Miguel Chavez Peña, D. Mariano Cano, D. Doroteo Espinosa, D. Marcelo Jimenez, D. Liberato Torres y D. Rafael Maldonado, por falsa amonedacion, y ademas por peculado contra Cortés; las sentencias pronunciadas en ambas instancias; lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal en calidad de Procurador General; y todo lo demas que convino: considerando: que los fundamentos en que se apoya la sentencia del Tribunal de Circuito de Querétaro, son bastantes para fundarla respecto del delito de falsa amonedacion; que los en que se apoya para absolver á Cortés del delito de peculado no lo son, porque habiéndose mandado formar la causa por cuerda separada respecto de ese delito, ella no está sujeta á la jurisdiccion federal sino á la comun, por los fundamentos de dicha sentencia respecto del delito de falsa amonedacion, se aprueba en todas sus partes; y se reprueba en la parte que absuelve á Cortés del cargo de peculado por el fundamento referido, de conformidad con todo lo pedido por el Sr. Fiscal en calidad de Procurador General.—Devuélvanse las actuaciones de 1ª y de 2ª instancia al Tribunal de Circuito de Querétaro, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los Señores Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Junio 19 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## CAUSA

*Instruida en el Juzgado de Distrito de Zacatecas contra el C. Pablo Magadan y otros, por no haber concurrido á las elecciones que para Presidente de la República tuvieron lugar en el partido electoral de Nieves.*

PEDIMENTO DEL C. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que la presente causa determinada por el Juzgado de Letras de Mazapil, hasta ponerla en estado de sentencia, se ha proseguido contra los CC. Agustin Monsivais y Florentino J. Escobedo, en cumplimiento del superior auto de 24 de Abril del presente año, que confirmó el auto de 6 de Noviembre de 1871, en la parte que mandó sobreseer respecto de los electores al colegio electoral de Nieves, Pablo Magadan, Antonio Zertuche y Dolores Delgado; y revocándolo por lo que respecta á los CC. Monsivais y Escobedo, devolvió la sumaria al juzgado para que se prosiguiera contra los dichos. El Juez de letras de Mazapil, previas las confesiones con cargos que hizo á los acusados, con ampliaciones de sus preparatorias por si tenian que añadir, y nombrados los defensores de cada uno, evacuadas las defensas, la remitió á ese juzgado para que V. se sirviera fallar en definitiva.

Esto expuesto, y no induciendo novedad respecto del cargo hecho á los acusados,